

ECONOMÍA Y TRABAJO



Los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, al fondo, con, desde la izquierda, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el de CC OO, Unal Sordo, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, en la firma del acuerdo de los ERTE el 20 de enero. / POOL

Escrivá no logra pactar la prórroga de los ERTE a cinco días de su fin

El Gobierno tendrá que decidir si extiende la medida sin acuerdo con los agentes sociales

GORKA R. PÉREZ, Madrid
La prórroga de los ERTE sigue encallada. Gobierno y agentes sociales salieron de la reunión que mantuvieron ayer con las mismas diferencias con las que entraron. Esto es, mientras

que Seguridad Social planea, además de la ampliación hasta el 30 de septiembre, un reajuste de las ayudas que estimule la salida del ERTE de los trabajadores y penalizar a los que se mantienen, sindicatos y patronales presionan

en bloque para mantener el esquema actual. Según fuentes de la negociación aún existe margen para el acuerdo, pero la aprobación de la prórroga en el Consejo de Ministros de hoy queda en el aire.

A pesar de que todas las partes se habían dado el fin de semana de margen para revisar los pormenores de la última propuesta del Gobierno, el desacuerdo y la tensión se mantuvo durante toda la jornada de ayer. El epicentro del problema sigue siendo el mismo: el tamaño de las exoneraciones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ya había defendido esta misma postura en las renovaciones precedentes, no da su brazo a torcer. Pretende ampliar las ayudas dirigidas a rescatar trabajadores del ERTE, mientras se empeora las de aquellos que permanecen en él. Patronal y sindicatos tejieron un frente común contra la propuesta de Escrivá. Incluso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, más pragmática que su colega de gabinete, se alineó con los agentes sociales para tratar de sacar un pacto, según fuentes de la negociación.

Esta "inflexibilidad", tal y como la describen fuentes sindicales, supone un obstáculo para extender el uso de una herramienta de la que dependen unas 625.000 personas según los últimos datos de Seguridad Social. Ninguna de las partes consultadas confirmó si la prórroga será aprobada hoy, sin acuerdo, en el Consejo de Ministros, el último previsto antes de que venza el plazo actual de los ERTE, el 31 de mayo o se convocará un consejo de ministros extraordinario antes del viernes para ganar tiempo para negociar. "Sería muy mala idea tanto que se llevase a cabo su aprobación de manera unilateral, como que se pospusiera para un Consejo de Ministros extraordinario previo a la conclusión del periodo estipulado", reconoce una fuente sindical. Esta diferencia de opiniones no evita, sin embargo, que las ape-

laciones al diálogo sigan presentes. Que tan solo resten cinco días para que concluya el plazo supone un margen de tiempo suficiente para que las partes logren un acuerdo que recupere la senda del consenso social que ha guiado las anteriores prórrogas.

"Aunque tenemos un acuerdo con el texto, existe un fleco no menor con las exoneraciones. No hay ninguna justificación para que el acuerdo total no se lleve a cabo. Las partes concernientes al Ministerio de Trabajo están resueltas y solo falta el compromiso de Seguridad Social. De no ser así alguien deberá asumir su responsabilidad", apunta Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO.

La figura de los ERTE, que están sosteniendo a miles de empresas durante la pandemia, había generado una concatenación de acuerdos entre Gobierno y agen-

tes sociales que fue motivo de satisfacción en todas ellas. De ahí que la extensión de estos no haya estado nunca discutida. Si, en cambio, en la vertiente de las exoneraciones. Otro pequeño escollo tenía que ver con el acceso de los fijos discontinuos a los ERTE, "algo que se ha ajustado para que nadie se quede fuera", dicen las fuentes consultadas.

Esta incapacidad de alcanzar un acuerdo generó ayer que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tildara de "mercado" la negociación. "Es incomprendible que se nos estén presentando ofertas y no ofertas, esto no es un mercado. Es una negociación sería", criticó Garamendi en un evento en la Casa de América. La patronal no entiende que junto con la ampliación de cuatro meses tenga que producirse una alteración del esquema actual de exoneraciones, teniendo en cuenta

que la pandemia sigue castigando a empresas y trabajadores. "Una prórroga es una prórroga, son 20 minutos más con las mismas reglas de juego y con el mismo balón, no con otras reglas y otro balón", añadió. El esquema actual de los ERTE establece exoneraciones de cuotas para los sectores ultraprotectados y empresas del 85% para compañías con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.

En los ERTE por impedimento de actividad, las exoneraciones son de entre el 90% y el 100%, mientras que en los ERTE de limitación de actividad las exenciones son decrecientes hasta mayo de 2021. Para empresas de menos de 50 trabajadores, estas fueron del 100% en febrero, del 90% en marzo y del 85% en abril y serán del 80% en mayo.

Acuerdo para sellar la Alianza por la Formación Profesional

Gobierno, sindicatos y patronal sellaron ayer su unión para impulsar la Alianza por la Formación Profesional, que persigue una transformación "radical" de estas enseñanzas para mejorar su calidad y adaptarla a las necesidades reales del tejido empresarial español. En un acto celebrado en la Casa de América, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, junto al presidente de la CEOE y los líderes de UGT y CC OO, presentó esta iniciativa que culminará con la nueva ley de Formación Profesional (FP),

cuya "primera lectura" en Consejo de Ministros será el próximo mes de junio, según avanzó. "Un país sin una FP de calidad es un país sin futuro", aseguró Celaá.

A la Alianza, que contará con un plan de trabajo anual en el que se perfilarán actuaciones concretas para la consecución de sus objetivos, se han unido ya más de medio centenar de grandes y medianas empresas, organizaciones sindicales y entidades sociales. España, según advirtió la ministra, necesita técnicos con cualificación intermedia, y

recordó que las previsiones en 2025 indican que el 49% de los puestos de trabajo en Europa requerirán una cualificación intermedia, mientras que solo el 16% serán de baja cualificación. En la actualidad, en España el 25% de las personas tiene cualificación intermedia y el 35%, baja. "Esta situación evidencia la necesidad que tiene nuestro país de personas con titulación de técnico medio y técnico superior de perfiles profesionales que actualmente no se encuentran", completó.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, subrayó que la FP es la "mayor política activa de empleo" del país, y consideró como "clave" la Formación Profesional Dual (prácticas de empresas de los alumnos).

Malestar entre los empresarios por el retraso de las ayudas directas

DANIEL LARA, Madrid

Las pymes españolas llevan dos meses y medio a la espera de recibir las ansiadas ayudas que aprobó el Consejo de Ministros a comienzos de marzo. La batería de 11.000 millones —7.000 millones en forma de subvenciones directas— que llegará a una de cada 12 empresas continúa en manos de las comunidades autónomas mientras los empresarios se encuentran en una situación crítica, según el escenario dibujado por representantes de distintas patronales.

"Desgraciadamente los estímulos no llegan a las pymes, y lo denuncio abiertamente. No han recibido ni un solo euro", señaló ayer Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España añadió: "Las ayudas se aprobaron hace meses y aún no sabemos cuándo ni cómo van a llegar. La sensación es que el hostelerero tendrá que volver a sacarse las castañas del fuego".

Inyección directa

Cepyme y otros grupos empresariales culpan del retraso al Gobierno, por delegar la distribución de los fondos en las comunidades autónomas, en lugar de inyectarlo de manera directa a las empresas como han hecho otros países vecinos, de forma que el dinero llegase de forma inmediata. Sin embargo, Cuerva reconoció que desconoce por qué el sistema actual es tan ineficaz: "Se tenían que firmar unos acuerdos previos con las comunidades autónomas para que estas pudieran hacer llegar el dinero a las empresas y lo que sabemos es que están firmados, pero más allá de ello, no tenemos conocimiento".

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos (ATA), también culpó al "farragoso" sistema ideado por el Ejecutivo del retraso en la inyección del dinero. Amor opina que, debido a la redacción de la norma, las comunidades tienen "dificultades" para dar las ayudas y las empresas para "justificar" su necesidad. "Cuando se quiere ayudar no se ponen zancadillas", criticó.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, criticó el nuevo sistema de restricciones al movimiento, que ha derivado en diferentes horarios de apertura para bares y restaurantes en función de su comunidad: "Unas han decidido causar la ruina [a los hosteleros]". En este sentido, Yzuel señaló a Cataluña como "una de las más crueles" con su sector.